

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Valdivia
CAUSA ROL : C-650-2020
CARATULADO : SANTANA/FISCO DE CHILE - SEREMI

Valdivia, a catorce de septiembre del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Al folio 1, don Jorge Andrés Ríos del Río, abogado, domiciliado en calle Aníbal Pinto 1999, de la comuna de Valdivia, en representación, según mandato judicial que se acompaña de doña **JUANA CARCAMO VELASQUEZ**, C.I. N° 9.149.479-5, viuda, labores de hogar, domiciliada en calle Osvaldo Muñoz N° 713 de la comuna de Osorno, **VERONICA JIMENA SANTANA CARCAMO**, C.I. N° 11.013.488-6, casada, labores de hogar, domiciliada en pasaje Los Vilos N° 1203, Población Cipriano Uribe de la comuna de Osorno, **OMAR RODRIGO SANTANA CARCAMO**, C.I. N° 10.773.074-5, casado, ingeniero civil, domiciliado en pasaje Los Vilos N° 1208 Población Cipriano Uribe de la comuna de Osorno y don **MARCELO ALEJANDRO SANTANA CARCAMO**, C.I. N° 11.708.509-0, casado, asistente social domiciliado en pasaje Lican – Ray N° 2542 Villa Araucanía comuna de Osorno, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de Derecho Público, representado legalmente por don Natalio Vodanovic Schnacke, Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valdivia, ambos con domicilio en calle Independencia N° 630 oficina 31 de la comuna de Valdivia, por los siguientes argumentos de hecho de derecho que expone.

LOS HECHOS

1.- Según consta en Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocido como Informe Rettig, en su Volumen I, Tomo 1, página 4021 y según se acreditó en los autos rol 1.673-2003 de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, sentencia que actualmente se encuentra ejecutoriada. El cónyuge y padre de sus representados, don Raúl Santana Alarcón, el día 16 de septiembre de 1973, se presentó voluntariamente en el domicilio de un oficial de Carabineros, tras ser llamado por un bando militar, para ser luego trasladado hasta la Tercera Comisaria de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKDXBHWXDJ

Carabineros de Rahue Osorno, desde donde el día 19 de septiembre, fue trasladado hasta el Puente Pilmaiquén, donde fue fusilado, apareciendo su cadáver a orillas del mismo río en enero de 1974.

Al momento de su ejecución sumaria don Raúl Santana Alarcón, tenía 29 años de edad, era militante del Partido Socialista y se desempeñaba como auxiliar de la Universidad de Chile, sede Osorno.

2.- En los autos criminales rol 1673-2003 en el Número II, considerandos 14 y siguientes a fojas 10.685 de autos, en la sentencia definitiva, se logró acreditar la participación criminal en calidad de autores del homicidio calificado de don Raúl Santana Alarcón, de los ex funcionarios de Carabineros de Chile Adrián Fernández Hernández, Rolando Becker Soliz, Rafael Pérez Torres y Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, quienes fueron condenados a penas de 15 y 12 años de presidio mayor en su grado medio.

3.- De los antecedentes expuestos se concluye que el padre y cónyuge de los demandantes fue detenido y ejecutado sumariamente por los agentes del Estado, ya individualizados quienes como ya se indicó fueron sometidos a condena criminal que actualmente se encuentra ejecutoriada y en etapa de cumplimiento.

4.- Una vez producida la detención y ejecución de don Raúl Santana Alarcón, su grupo familiar, su cónyuge y sus hijos, todos demandantes de autos, procuraron por sus propios medios encontrarlo, sepultarlo y más adelante hacer justicia por este crimen, siendo permanentemente rechazados por los organismos estatales, debiendo recurrir finalmente al apoyo de la Iglesia Católica y de otros familiares que estaban sufriendo una situación similar, con quienes dieron forma a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno.

5.- Por lo expuesto y desde el 16 de septiembre de 1973, el grupo familiar del demandante y sus hijos a quien represento, nunca han cesado sus esfuerzos para dar primero con el paradero de su padre detenido desaparecido y hacer justicia frente al crimen del que han sido víctimas, situación que los ha marcado y determinado su vida, generando en ellos una permanente sensación de vacío y dolor ya que el duelo se ha tornado en ellos en un estado permanente.



6.- Específicamente para describir lo vivido por mis representados representada, me limitaré a reproducir un relato individual que me hicieron llegar en forma previa a la elaboración de esta demanda:

6.1 “Soy Juana Cárcamo Velásquez, esposa de Raúl Santana Alarcón (Ejecutado Político) que a través del presente relato tiene a bien declarar los daños sufridos por parte de la suscrita y de mi familia una vez que se produce el golpe militar y la posterior dictadura.

El día 16 de septiembre de 1973 por un Bando emitido por radio se llamó a mi Esposo a presentarse ante las nuevas autoridades. Al día 17 de septiembre fue allanado mi domicilio, por un contingente de carabineros donde destruyen todo a su paso las camas son rotas con bayonetas, todo el comestible lo votan intimidan a mis hijos pequeños de 2, 4 y 8 años respectivamente, frente a estos hechos los encaro y le solicito que se retiren de mi hogar, al no pillar a mi esposo en la casa se van lanzando una amenaza que si mi esposo no se entregaba al que se llevarían detenido seria al hijo mayor de los hombres, frente a esto tome la decisión de salir a buscar a mi esposo al cual lo encuentro cerca del campamento Manuel Rodríguez luego de recibir la noticia de lo acontecido en mi hogar mi Esposo decide presentarse en mi compañía en el domicilio del Capitán Adrián Fernández un oficial de la Tercera Comisaría de Rahue, Osorno. Ya que lo conocía porque trabajaba en la gobernación. Este lo dejó en su casa de calle Manuel Rodríguez, de la ciudad de Osorno. Desde allí fue trasladado a la Tercera Comisaría de Rahue, donde fue visto por testigos entre el 17 y 19 de septiembre de 1973. El día 19 en la noche lo sacaron de dicha unidad policial y llevada al puente sobre el Río Pilmaiquén, lugar donde se le asesino en forma cobarde y cruel.

El mismo día 17 de Septiembre fui detenida por funcionarios de la Dictadura que se trasladaban en una camioneta naranja grande fue mi sorpresa que en dicha camioneta también estaban las personas con las cuales había conversado en el trayecto desde mi casa hasta que pude hablar con mi marido, fui trasladada al hospital de Osorno hoy día llamado San José donde fui interrogada por las personas con las cuales había conversado sobre la relación que tenían con mi esposo al no tener antecedentes que



aportar luego de reiteradas amenazas y vejámenes fui puesta en libertad en horario de toque de queda.

Mi esposo era dirigente de los pobladores sin casa de la ciudad de Osorno y funcionario de la Universidad de Chile donde cumplía labores de estafeta por lo tanto era el sustento económico de mi familia que estaba compuesta por mí y mis tres hijos y mi padre.

Una vez ocurrida la desaparición de mi esposo desde la tercera comisaria de Osorno nuestra vida nos cambió totalmente.

Comencé a buscar por distintos recintos a mi esposo sin tener respuesta alguna. Nos sosteníamos con la pensión de mi padre de 80 años el cual falleció el año 1974. En esta búsqueda me fui encontrado con otras familiares que se encontraban en las mismas condiciones mías.

Fue en febrero del año 1974 que por una sobrina de una prima en segundo grado que me entero que ellos se encontraban rastreando el rio Pilmaiquen y que pozón que se forma para la baja del rio en verano se encontraban varios cuerpos y que en uno de ellos estaban los documentos de mi esposo. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico legal de Osorno. Donde concurrí en primera instancia no me quería dejar entrar a ver los cuerpos para ver si uno de ellos era de mi esposo hasta que se me autorizo pude ver sobre una camilla a mi esposo amarrado con las alambres de púas y estacas de madera a su cuerpo le había regado un polvo blanco que se pudo establecer que era cal, el cuerpo al quedar en un pozo una parte de el no quedo bajo el agua por lo que se podía apreciar parte de su uniforme de la Universidad y sus rasgos faciales y parte de su cuerpo que como se esposa los conocía además contenía los documentos que él siempre los manejo plastificados. Una vez realizada la autopsia donde se verifico que era mi esposo la jueza ordeno entregar el cuerpo y que fuera llevado directamente al cementerio a lo cual opuse resistencia indicándole que mi marido no era ningún perro para no poder velar sus restos en su hogar a lo cual accedió solamente una noche y el velatorio y funeral no se le podía dar difusión por ningún medio.

Luego de esto vienen años de penurias tantos económicos como psicológicas tuve que salir a trabajar como empleada doméstica desde las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKDXBHWXDJ

06:00 hasta las 02:00 ya que llevaba trabaja de lavado y planchado para mi hogar ya que trabaja en un lugar donde se daba pensión a estudiantes.

Esto duro un par de años donde gracias al ahorro pude obtener mi vivienda que fue ejecutada desde el gobierno de Salvador Allende. Pero no estuvo exento de problemas que los militares y carabineros se quisieron apropiar de nuestras casas lo cual no ocurrió gracias a la oposición de los pobladores.

Comencé a trabajar en mi hogar con pensionista donde toda mi familia cooperaban muchas veces mis hijos tuvieron que asumir esta responsabilidad por mi estado de salud.

Una vez que se cierra la Universidad de Chile sede Osorno no pude seguir trabajando con pensionista por lo cual me fui a trabajar a Santiago de empleada dejando a mis hijos al cuidado de su hermana mayor esto duro aproximadamente dos años.

Luego decido regresar porque como familia tomamos el acuerdo de trabajar todos para salir adelante mis hijos menores vendían diario yo mi hija nos instalamos con pequeño kiosko en el mercado municipal que nos daba para alimentarnos.

Hoy valoro el esfuerzo de mis hijos que tuvieron que dejar de lado su niñez y adolescencia para enfrentar la vida que no le correspondía como niños aun así siempre con sus estudios muchas veces no tenía ni para los útiles y menos uniforme, pero ellos comprendían que lo único que había que hacer era estudiar estar juntos como familia.

Lamentablemente no les pude dar una educación superior a mis hijos teniendo las competencias para ello.

Fue muy difícil para mí quedar viuda a las 28 con tres hijos todos menores como ya lo mencioné porque tuve que hacer de madre y padre.

Hoy los 75 años sufro muchas enfermedades que se fueron acentuando desde los 50 años diabetes, hipertensión, reumatoides, etc. Los cuales muchas de ellas según los médicos son secuelas de los trabajos que me toco realizar de los cuales no me arrepiento y lo volvería hacer por mis hijos.

En la parte psicología igual hay mucho daño espero que mis hijos den sus experiencias personales.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKDXBHWXDJ

Pero como familia gracias a la fundación Fasic pudimos recibir ayuda en mi caso con la Doctora Fanny Pollarolo y mis hijos con la Doctora Rosario Domínguez durante varios años nos atendieron en Santiago, porque el gobierno nunca se han hecho responsables de este daño que sufrieron nuestras familias y hablo de familias porque fueron muchas que pasaron los mismos hecho.

Ya no puedo seguir porque el recordar me trae recuerdos, los cuales traen dolor, angustia, odio por lo que sufrió mi esposo y nuestra familia.”

6.2 “Mi nombre es Verónica Jimena Santana Cárcamo hoy a la edad de 54 años me encuentro en la obligación de contar mi testimonio de vida.

La historia que les contaré comienza cuando yo tenía ocho años, en este periodo, mi vida tuvo un rotundo cambio, una mañana de 1973 siendo un 11 de septiembre, jamás imagine que no vería nunca más a mi padre. Posterior al golpe militar mi madre comienza la búsqueda de mi padre, cuando en ocasiones acompañaba a mi madre para tener información de mi papa sentía mucha angustia al no tener información de él. Al transcurrir los meses mi madre tuvo que abandonarnos emocional y presencialmente, ella tuvo que comenzar a trabajar para poder solventar el vacío económico que había dejado la desaparición de mi padre, recuerdo que solo veía a mi madre los días domingos, como niña me sentí abandonada.

Mi padre aparece en el verano de 1974 en la morgue mi madre lo reconoce por su ropa, las autoridades no le querían dar permiso para velarlo, luego se le dio la autorización por una noche, se corrió la voz luego visita y familiares a la casa, esa misma noche los familiares abrieron el ataúd y pude ver a mi padre, en un estado de descomposición total para mí fue algo desgarrador, a partir de este hecho comienza una nueva historia en mi vida. La muerte de mi papa y este hecho puntual a provocado vivir toda mi vida con depresión y ansiedad.

En el colegio se enteraron que mi padre había aparecido y en más de alguna ocasión mis compañeros y compañeras me llamaron huacha, lo cual producía mucha tristeza e impotencia me sentí débil e incapaz de defenderme, me hubiera gustado que mi padre me defendiera. Debido a las carencias económicas que vive en mi infancia el colegio tuvo que donarme mis útiles escolares y uniforme muchos años de mi enseñanza básica, en mi



infancia y mi adolescencia siempre vestí ropa de segunda mano y siempre fui limitada en este sentido, si bien mi madre se esforzaba para darme lo mejor, muchas veces no pudo satisfacer mis necesidades como niña.

En mi adolescencia existió mucha carencia afectiva nunca tuve el apoyo de mi padre, me hubiera gustado que él me hubiera orientado en el desarrollo de mi sexualidad tanto emocional como afectiva.

Debido a todas estas carencias emocionales y económicas de muy niña tuve que hacerme cargo de mis dos hermanos asumiendo un rol que a mi edad no correspondía tuve que estudiar vespertino, porque en las mañanas tenía que trabajar con mi mama en conclusión tuve que despojarme de mi vida normal como niña y adolescente, fueron años de trabajo y asumiendo el rol de madre y padre en mi casa, por ausencia de ellos.

En la actualidad estoy bajo supervisión médica, el apoyo que recibo es de un psicólogo y psiquiatra, aun no supero esta situación de ansiedad y depresión.”

6.3 “Soy Omar Santana Cárcamo, Rut 10.773.74-5, hijo de Raúl Santana Alarcón (Ejecutado Político) y Juana Cárcamo Velázquez que a través del presente relato tiene a

El día 16 de septiembre de 1973 por un Bando emitido por radio se llamó a mi padre a presentarse ante las nuevas autoridades. Al día 17 de septiembre fue allanado mi domicilio, por un contingente de carabineros los cuales le indican a mi madre si mi padre no se entregaba al que se llevarían detenido sería al hijo mayor de los hombres, frente a esto mi madre decide salir a buscar a mi padre al cual lo encuentran cerca del campamento Manuel Rodríguez luego de recibir la noticia de lo acontecido en mi hogar mi padre decide presentarse y en compañía de mi madre en el domicilio del Capitán Adrián Fernández un oficial de la Tercera Comisaría de Rahue, Osorno. Ya que lo conocía porque trabajaba en la gobernación. Este lo dejó en su casa de calle Manuel Rodríguez, de la ciudad de Osorno. Desde allí fue trasladado a la Tercera Comisaría de Rahue, donde fue visto por testigos entre el 17 y 19 de septiembre de 1973. El día 19 en la noche lo sacaron de dicha unidad policial y llevado al puente sobre el Río Pilmaiquén, lugar donde se le asesinó en forma cobarde y cruel.



Mi padre era dirigente de los pobladores sin casa de la ciudad de Osorno y funcionario de la Universidad de Chile donde cumplía labores de estafeta por lo tanto era el sustento económico de mi familia que estaba compuesta por mi madre y mis dos hermanos. Al momento de ocurrir los hechos yo tenía 4 años 7 meses, mi hermana 8 años y mi hermano menos 2 años.

Una vez encontrado mi padre y sepultado la vida nos cambió totalmente no teniendo un padre presente, mi madre tuvo que salir a trabajar y nosotros comenzar a quedar al cuidado de mi hermana, vecinos y mi tía Norma Cárcamo hermana de mi madre.

Mi madre empezó a realizar trabajos de empleada doméstica desde las 07:00 am hasta las 22:00 hrs. Luego de eso llegaba a nuestro hogar a seguir trabajando con planchados y lavados con el fin de poder pagar sus cuotas para que le puedan entregar su casa que estaban construyendo y para poder darnos de comer. Gracias a la ayuda de Don Alfonso Aguilar quien fuera compañero de trabajo de mi padre cuando era panadero, quien nos llevaba pan constantemente teníamos dicho alimento.

Luego el año 1975 se nos entregó nuestra casa sin antes pasar por muchos problemas hasta en un minuto vivir la ocupación por militares de nuestro hogar ya que las habían reasignado.

Usted se preguntarán como me puedo acordar de estos detalles pero frente a lo ocurrido en mi familia donde mi madre luchó hasta que encontró a mi padre y luego seguir luchando por justicia quien relata fue su apoyo y desde el primer minuto la acompañe, también como una prenda de garantía para su seguridad. Porque creía que estando con un menor no se atrevería hacerle algo ya que ella igual estuvo detenida en varias oportunidades.

Cuando ya comencé asistir al colegio era tratado en forma diferente, con los años fui entiendo el maltrato al que era expuesto como por ejemplo, para un día del papá una profesora dijo “que se pongan de pie los alumnos que sus padres van asistir a la ceremonia del día del papá y acto seguido, pronunció Santana tú no te preocupes en pararte, porque el comunista de tu padre no puede venir de donde está”.



Desde ese momento comencé a tomar real conciencia lo que significaba ser un hijo de un Ejecutado Político, debido a esto sufrimos muchas carencias en mi caso fui detenido a los 12 años llevado a un sector de un río que hoy es conocido como parque chuyaca donde en esos años se encontraba el cementerio municipal, en dicho lugar fui agredido física y psicológicamente para delatar lo que mi madre hacía en nuestro hogar o si tenía contactos políticos y luego de esto me van a dejar a mi casa como si no hubiera ocurrido nada y luego de insultar a mi madre se retiran.

Luego mi madre comenzó a trabajar con pensionista del Instituto Adolfo Mathei y de la Universidad de Chile sede Osorno por lo cual todos teníamos responsabilidades, como hacer aseo, camas o muchas veces cocinar cuando mi madre no podía por problemas de salud y con ello faltar muchas veces al colegio, sobre todo mi hermana Verónica, cuando dejó de funcionar el instituto Adolfo Mathei y la Universidad De Chile sede Osorno fue transformada en Instituto Profesional, mi madre debió dejar esta labor ya que no era rentable y ya no llegaban pensionista, además su salud no la acompañaba, por lo que a la edad de 13 años yo y mi hermano menor de 11 tuvimos que salir a trabajar comenzamos vendiendo diarios cerca del terminal de buses donde iba en las mañanas y en las tardes. Luego mi madre se recuperó un poco de su salud, por lo que tomo la decisión de irse a trabajar a la ciudad de Santiago, quedando al cuidado de mi hermana mayor por un periodo de dos años.

Luego del regreso de mi madre coincidió con mi ingreso a la enseñanza media donde debo agradecer a los profesores de dicho liceo los cuales me apoyaron en esta etapa con útiles escolares, aseo y uniforme escolar ya que mi madre no le alcanzaba y para otras tantas cosas como para la locomoción colectiva, cuotas de curso y trabajos extra programáticos.

En estos años de mi enseñanza media los periodos de vacaciones invierno y verano colaboraba con mi familia con trabajos de temporada sobre todo en verano que me iba a trabajar a la localidad de Maullín para juntar dinero y ayudar en mi hogar para cubrir las necesidades básicas.

En el año 1986 el día 06 de Julio nuevamente fui detenido al dirigirme a la casa de mi tía, por una patrulla de Carabineros donde me



llevaron a la tenencia de carretera siendo desnudado y recibiendo apremios físicos, luego fui trasladado a la primera comisaría de Osorno, donde me interrogaron miembros de la comisión civil sobre los dirigentes de la enseñanza media que operaban dentro de mi liceo, como una forma de amedrentar me amenazaban con acusarme de agresión carabineros y porte de elementos subversivos, además de sus respectivos golpes. Luego la oportuna intervención de mi madre y del Abogado Don Oscar Álvarez, gracias a esto fui puesto en libertad.

Mi hogar fue constantemente hostigado con punto fijo de personal de civil (CNI y DINA) con seguimiento a mi madre y grupo familiar.

Una vez terminada mi enseñanza media no pude continuar con mis estudios por no tener los medios económicos, sin embargo, teniendo los méritos académicos. A la de 30 años pude ingresar a la Universidad donde me logre titular con mucho sacrificio y con un alto costo familiar ya que estudiaba después de mi jornada laboral durante 5 años.

Como verán tuve muchas necesidades económicas las cuales fueron producto del asesinato de mi padre por parte de funcionarios del Estado Chile que instauro una política de exterminio y persecución solamente por pensar distinto.

Pero lo fundamental es la falta de mi padre como persona que no lo tuve nunca a mi lado me lo arrebataron y hasta el día de hoy nunca han dicho él porque. No lo tuve para el día del papa, navidad, cumpleaños, licenciatura, graduación y casamiento, etc.

Espero que este relato sirva en algo para poder ilustrar lo que vivimos como familia que nunca más fue la misma.”

6.4 “Soy Marcelo Santana Cárcamo, la importancia de los padres en la vida de un hijo es fundamental en el proceso de crianza, ellos son los responsables de cuidar, amar y guiar sus pasos. Por esta razón, sus vidas son valiosas, esperando desde el punto de vista de un hijo que nunca la muerte les toque, pero, sé que esto es imposible porque todos tenemos que pasar por este umbral en forma natural. Es doloroso cuando esta vida, se interrumpe por causas inesperadas y por responsabilidades de terceros. Es así cuando tenía 2 años de edad, mi padre Raúl Santana Alarcón, se le apago su vida y es Asesinado en septiembre del año 1973, por agentes del



Estado Chileno (Carabineros). La razón fundamental fue tener una ideología de pensamiento distinto, apoyando y respaldando el gobierno de turno en ese momento. Para los que tenían conciencia en ese momento, como mi madre debe haber sido doloroso, triste, devastador y cruel, se fue su compañero, su amor y por sobre todo el padre de sus 3 hijos, de 6,4 y 2 años, respectivamente.

En la actualidad tengo 48 años y no hay días que me pregunto, porque le toco a él, cual es la razón que justifico esta medida extremista, no existe una explicación y los responsables de esta decisión y ejecución siguieron con sus vidas normales, protegidos por leyes del Estado Chile.

Es cierto, que cuando esto sucedió yo tenía 2 años y alguna vez, me preguntaron, pero a ti de que te afecto si tus eras pequeño, respondo siempre señalando lo siguiente:

a- Tuve que enfrentar la ausencia del cariño y el amor de mi padre. Además, carecí de su rol de guía en mi crianza, porque en muchas etapas de mi vida las necesité y no estuvo.

b- Ha medida que pasan los años, me fui dando cuenta del dolor, tristeza y rabia, de las circunstancias que envolvían el fallecimiento de mi padre. Esto me afecto en mi estabilidad emocional y los cambios en mis estados de ánimo. Por esta razón recibí apoyo Psicológico en mi infancia y adolescencia.

c- Experimenté dificultades en mi aprendizaje lo que se tradujo en un retraso pedagógico, reprobando en tres ocasiones Primer Año de enseñanza básica, en el último año que curse primer año básico la Educadora Diferencial que intervino me diagnostico un trastorno de aprendizaje Dislexia, el que obstaculizaba mi desarrollo escolar. También externalice conductas disruptivas que me dificultaban adaptarme adecuadamente a la dinámica escolar como comportamientos agresivos y violentos en mi vinculación con los compañeros de curso. Estas dificultades la fui mejorando con el apoyo de mi madre, profesores con vocación y por mi esfuerzo personal. Estos aspectos de mi aprendizaje y personalidad me acompañaron en las diversas etapas de estudio de mi vida y durante mi vida Universitaria.

d- Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en mi familia, durante los años de gobierno Militar, mi madre recibía una pensión



miserable, que solo le alcanzaba por ejemplo a costear solo un Cilindro de Gas. Es por esta razón, que debí junto a mis hermanos realizar trabajo infantil. Es así como, desde los 8 años, trabaje vendiendo diarios en la calle y trabajando como feriante en la feria libres de Osorno, asumiendo responsabilidades que no competen a un niño de esta edad y exponiéndome a riesgos innecesarios para llevar ingresos a mi hogar. Esto en ocasiones fue el único sustento de mi madre y mis hermanos.

e- La crianza de mi madre hacia nosotros no estuvo exenta de dificultades, ya que tuvo que batallar sola , sin el apoyo de redes sociales y familiares, con sus competencias parentales disminuidas principalmente por su inestabilidad emocional y responder a lo que se esperaba del rol paterno, tuvo que sufrir el cuestionamiento de la sociedad, de personas que desconocían nuestro mundo interno y su coraje para luchar contra a la adversidad de la vida, situación que le fue impuesta arbitrariamente por violencia del estado chileno. Sin olvidar que sufrimos en este contexto político persecuciones y discriminaciones por ser un familiar de Ejecutado político.

La muerte de mi padre, me marco tanto en lo emocional y en el desarrollo personal, no existe valor económico que pueda pagar su pérdida. Hoy trato de proporcionar lo mejor a mi familia y espero que nunca más sucedan en mi país estos hechos violentos que vulneran y desintegran a las familias. La capacidad de re-silencia ha sido parte fundamental para levantarnos frente al Maltrato del Gobierno Militar, representando al Estado Chileno en este periodo. No existe Justicia, sin reivindicación por los Daños ocasionados.”

7.- En consecuencia, la pérdida del padre y cónyuge de los demandantes, produjo un agudo e imborrable daño al grupo familiar de mis representados generando en ellos pobreza, marginalidad y un duelo interminable dado que nunca han dado con el paradero de su padre Ejecutado Político, todo lo cual les produjo la imposibilidad de acceder a la educación formar de sus hijas, todo lo cual marco el futuro de las mismas, generando en ellas graves perjuicios psicológicos y emocionales, ya que no solo le generaron innumerables traumas y sufrimientos irreversibles, todo lo



cual es constitutivo de un agudo daño moral que deben ser reparados y compensados.

EL DERECHO

2.- En la Corte de Apelaciones de Valdivia, se llevó el proceso penal por el homicidio calificado don Raúl Santana Alarcon, padre y cónyuge de los demandantes y de otros tantos ejecutados políticos, proceso criminal que llevó el rol N° 1673-2003, caso Rahue. En tal proceso se condenó como autores de homicidio calificado a los ex funcionarios de carabineros de Chile Adrián Fernández Hernández, Rolando Becker Soliz, Rafael Pérez Torres y Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, quienes fueron condenados a penas de 15 y 12 años de presidio mayor en su grado medio, lo que consta a fojas 10.872 y 10.873 de autos, en causa criminal que actualmente se encuentra ejecutoriada.

2.- En relación con los hechos expuestos, el 25 de abril de 1990 se publicó en el Diario Oficial el DS N° 355 de justicia, por el cual se crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, entidad a la cual el estado mandata “...contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos... sean en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el estado de Chile”, agregando más adelante que para estos efectos “se entenderá por graves violaciones, las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del estado, por actos de sus agentes o de personas a su servicio...”.

3.- Concluida la labor investigativa de la Comisión de Verdad y Reconciliación, se elabora un informe dirigido al Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, conocido como Informe Rettig, en alusión al presidente de la entidad. Dicho documento, en su Volumen I, Tomo 1, página 402, analizan el caso que nos ocupa, considerándolo como un hecho de violación grave de los derechos humanos en los términos del inciso 2° del artículo 1° del D.S. N° 355 de 1990.

4.- En relación con lo expuesto, la Constitución Política de la República, en su artículo 38 inciso segundo establece que “cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKXDXBHWXDJ

tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”

5.- Por su parte la ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado en su artículo 4º establece que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicios de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.

6.- Encontrándose acreditado por sentencia dictada en los autos Rol 1673-2003 que los ex funcionarios de Carabineros de Chile Adrián Fernández Hernández, Rolando Becker Soliz, y Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, fueron condenados a penas de 15 y 12 años de presidio mayor en su grado medio, lo que consta a fojas 10.872 y 10.873 de autos, en causa criminal que actualmente se encuentra ejecutoriada, por el homicidio calificado de don Raúl Santana Alarcón, padre y cónyuge de mis representados, surge de manera inequívoca la responsabilidad civil del Estado, atendida la comisión de estos delitos en el ejercicio y con ocasión de sus funciones públicas.

7.- Por lo expuesto es que en virtud de lo establecido en las normas ya citadas y en los artículos 2.314 y siguientes de Código Civil, y en especial del 2.320 del mismo cuerpo legal, en cuya virtud demando la responsabilidad civil del Estado de Chile por el homicidio calificado del cónyuge y padre de mis representados.

8.- En cuanto al ejercicio de esta acción judicial, ésta resulta oportuna, no obstante haber transcurrido más de 36 años desde el día de los homicidios, por cuanto en los hechos nos encontramos frente a un delito de carácter imprescriptible e inamistiable.

9.- En efecto, la oportunidad del ejercicio de esta acción civil, se sustenta además en que el secuestro calificado de estos autos, no reviste el carácter de un delito común, sino que el carácter de crimen contra la humanidad, por cuanto y sin perjuicio de las disposiciones precedentemente citadas, constituyen una infracción a lo establecido en los Convenios de Ginebra Sobre el Tratamiento a los Prisioneros de Guerra y a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra publicados en Diario Oficial el 18 de abril de 1951 y el 12 de agosto de 1950 respectivamente, específicamente a lo



estipulado en el artículo 3º de ambos cuerpos normativos, en cuya virtud “En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:

1.- Las Personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, detención o cualquiera otra causa, serán, en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A tal efecto queda prohibido, en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba mencionadas:

a.- los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles. Torturas y suplicios;

b.- la toma de rehenes:

c.- los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d.- las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por un tribunal regularmente constituido, provistos de garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

10.- La aplicación de los convenios de Ginebra a estos casos obedece a múltiples actuaciones y manifestaciones tanto expresa como tácitas de la Junta Nacional de Gobierno, altos mandos militares de la época y personeros civiles de dicho régimen de ipso facto, quienes se encuentran contestes en que entre septiembre de 1973 y 1976 existía en Chile una situación de guerra interna, a partir de la declaración del Estado de sitio como medida de excepción constitucional a lo largo del territorio nacional que supuso la introducción de procedimientos penales de tiempos de guerra regulados por el título III del Libro Primero, artículos 71 y siguientes del Código de Justicia Militar, situación que se ve refrendada por carta dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante 1974 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, citada por el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKXDXBHWXDJ

Profesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo III pagina 168.

11.- Por lo indicado, los hechos objeto de esta demanda constituyen infracciones graves a los citados convenios de Ginebra y por lo mismo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, situación de enorme relevancia, por cuanto su persecución y castigo se funda en principios de derecho internacional general que forman parte del derecho internacional positivo según señala el profesor Santiago Benadava en su trabajo Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica, página 212.

12.- Según señala el Profesor Hugo Llanos Mancilla en Teoría y Práctica del Derecho Internacional Público, Tomo III, pagina 36, son crímenes de guerra” ... las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que incluyen.... el asesinato o maltrato de prisioneros de guerra...”, como ocurren en los casos que nos ocupan.

13.- La imprescriptibilidad de este tipo de crímenes tiene en cuenta además el especial contexto histórico en que se cometieron, toda vez que fueron ejecutados por agentes de un régimen de facto, que tal como se ha demostrado en reiteradas causas sobre violaciones a los derechos humanos ventiladas ante los tribunales de la República, donde se practicó el terrorismo de Estado en forma sistemática, con lo que la sensación de impunidad y temor existente en la población de la zona y el país constituía una realidad que se debe tener presente al fallar esta causa.

14.- En relación con lo antes indicado, los Estados Americanos, entre ellos el nuestro, al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos y asumir entre otros, los deberes que le impone su artículo N° 1, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contraído la obligación general de proteger, respetar y garantizar cada uno de los derechos del pacto con lo que “el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación...” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 29 de julio de 1988).



15.- Una eventual declaración de prescripción de la acción civil en autos, no resultaría acorde con el deber asumido por el Estado de Chile ante la comunidad internacional, no solo a partir de lo establecido en la disposición señalada en el número anterior, sino que en los ya citados convenios de Ginebra, en su artículo 148 señala que “Ninguna parte contratante podrá exonerarse a sí misma, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma, u otra parte contratante, respecto a las infracciones previstas en el artículo anterior....” (Infracciones graves como la señalada en el artículo 3º del Convenio).

16.- En relación con lo expuesto, los tribunales superiores de justicia desde los años 2005 y 2006 en adelante, han dictado diversos fallos que declaran la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como el que nos ocupa en esta demanda, es así como en relación con los homicidios de Hugo Rivol Vásquez Martínez, Mario Superby Jeldres y José Matías Ñanco, en las causa rol 559-04 y 266-04 de la Excm. Corte Suprema se ha señalado que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra deriva de principios de derecho internacional general que desde la década de los 70 son parte de nuestro ordenamiento jurídico.

17.- Según consta en sentencia dictada en autos criminales donde se investigaron y sancionaron estos hechos, los homicidios y secuestros, que se practicaron en los domicilios de nuestros representados, domicilios que las víctimas compartían con los respectivos demandantes en calidad de hijos, situación que por lo mismo ha generado en cada uno de nuestros representados profundas y perturbadoras huellas, que los han marcado de por vida. Enfrentándose a condiciones sumamente precarias, tanto en el plano económico, como en el plano emocional.

18.- En cuanto al daño moral, entendido este como el dolor o sufrimiento generado en la demandante a partir del secuestro calificado de su hermano, resultan enormes, por cuanto está presente en su vida el vacío provocado a partir del crimen cometido por los ex funcionarios de Carabineros de Chile Adrián Fernández Hernández, Rolando Becker Soliz, Rafael Pérez Torres y Gustavo del Carmen Muñoz Albornoz, agentes públicos que actuaron en el ejercicio de sus funciones, por lo cual actuaban



bajo dependencia del Fisco de Chile, demandado en estos autos. El daño emocional es enorme, la violencia de las circunstancias en que se produjo el asesinato de su familiar está marcada en su memoria, circunstancias todas que serán suficientemente acreditadas en estos autos.

19.- Frente a este punto debemos agregar que respecto del daño moral, nuestra jurisprudencia ha sostenido que: “a diferencia de lo que ocurre en materia patrimonial, el daño moral no necesita ser acreditado, por lo cual, demostrada la trasgresión del derecho subjetivo, debe tenerse por probada la existencia misma del daño moral”

20.- Respecto de la prueba del daño moral, Carmen Domínguez señala que: “con ello aludimos a las verdaderas presunciones de Derecho de daño moral que nuestros Tribunales han reiteradamente reconocido con ocasión del perjuicio infligido por la muerte o lesiones de la víctima a aquellas personas con las que se encontraba o encuentra ligada afectivamente y en las que ni siquiera exigen prueba del parentesco o vínculo afectivo invocado. Como se ha sostenido, “aunque no haya prueba directa sobre el daño moral sufrido por el hermano de una persona asesinada, se deduce de este parentesco”.

21.- “El daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre por un hecho externo que afecta la integridad física y moral del individuo. Por lo tanto, la apreciación pecuniaria de ese daño debe considerarse por entero sometida a la estimación discrecional del juez, ya que dada su índole es incurso que no puede ni requiere ser acreditada”.

22.- “El daño moral por el carácter espiritual que reviste no debe ser fundamentado ni probado, correspondiéndole al juez apreciarlos prudencialmente, de acuerdo al mérito del proceso y a las reglas de equidad”.

23.- “Nuestros tribunales han establecido una nítida diferencia entre los perjuicios patrimoniales o no patrimoniales, pues mientras respecto de los primeros se exige una acreditación completa y exigente, en cuanto a los segundos ella es preferida al entenderse que, dada su naturaleza, la prueba es imposible”.



24.- Cita los criterios y factores a considerar para la evaluación del daño moral.

25.- Acreditada la existencia del homicidio calificado y la participación en ellos en calidad de autores de agentes públicos dependientes del Fisco de Chile, acreditada además la existencia de daños patrimoniales y morales que han recaído sobre los demandantes, es necesario referirnos a la existencia de una relación de causalidad entre el homicidio calificado y los perjuicios alegados, en este sentido la doctrina administrativista se ha pronunciado a favor de la teoría de la causa adecuada, en cuya virtud, “no todas las condiciones necesarias para producir un resultado son equivalentes, sino que la causa adecuada es aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producirlo”.

26.- En estos autos se acreditará la existencia de esta relación de causalidad y del hecho evidente que la única causa basal de todos los perjuicios que afectan a nuestra representada, radica en el secuestro calificado de su familiar, como se ha expresado anteriormente.

Por estas consideraciones y disposiciones legales que cita, pide tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de Derecho Público, representado por don Natalio Vodanovic Schnacke, abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Valdivia, ya individualizado, en procedimiento ordinario, acogerla a tramitación, y en definitiva condenarlo al pago, por concepto de daño moral a:

1.- Juana Cárcamo Velásquez, por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

2.- Verónica Jimena Santana Cárcamo por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

3.- Omar Rodrigo Santana Cárcamo por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

4.- Marcelo Alejandro Santana Cárcamo por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

O en su caso, las sumas que respecto de las demandantes y de acuerdo al mérito del proceso, determine SS., con reajustes e intereses desde



la notificación de la demanda, y hasta el efectivo pago de las mismas, con costas.

Al folio 12, con fecha 6 de octubre de 2020, se notificó al Abogado Procurador Fiscal en representación del Fisco de Chile.

Al folio 13, la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo en virtud de los siguientes antecedentes:

I.- EXCEPCIÓN DE PAGO. IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN ALEGADA POR HABER SIDO YA INDEMNIZADAS LOS DEMANDANTES

Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.

No resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior —y desde— lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

La complejidad reparatoria.

Como bien lo expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las



condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Asumida esta idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En este sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a V.S. a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas. De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DDHH no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKDXBHWXDJ

realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de la Ley 19.123.

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “*reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas*”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

II. EN SUBSIDIO, EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

En subsidio de la excepción de reparación alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida conforme a los siguientes argumentos; y a todo evento con relación de aquellos actores respecto de los cuales no se acreditaren satisfacciones del tipo de las antes señaladas.

Normas de prescripción aplicables.

Opone la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Según el relato del demandante, la detención, los apremios y torturas de que fue víctima, se produjeron en el año 1975.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKDXBHWXDJ

Es del caso SS. que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es el 3 de agosto de 2020, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que SS., estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Generalidades sobre la prescripción.

Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. *“Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”.*

Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”*

Fundamento de la prescripción



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKDXBHWXDJ

La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.



III.- EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACION RECLAMADA.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procedo a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Fijación de la indemnización por daño moral.

Con relación al daño moral hacemos presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para*



borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”.

Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extra patrimonial sufrida.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En efecto, en subsidio de las excepciones de reparación y prescripción de la acción deducida, esta parte alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, SS., debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión vitalicia, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del



derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

También es pertinente hacer presente a SS., que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente el monto pecuniario demandado.

Por lo señalado pide tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Al folio 17, el demandante evacuó el trámite de la réplica.

Al folio 19 la demandada evacuó el trámite de la dúplica.

Al folio 21, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

A fojas 48, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fin de evitar repeticiones, se dan por reproducidos los escritos fundamentales de demanda y de contestación, así como la parte petitoria de los mismos.

SEGUNDO: Que, como ha señalado la Excma. Corte Suprema (rol N° 13.699-15) las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y establecimiento normativo en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la *reparación íntegra* en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1. y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos y queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de Derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de



inmediato la responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de ese hecho. Éstas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales nacionales en tanto éstos no pueden interpretar las normas de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las normas de Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

TERCERO: Que, en efecto, estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales, en tanto éstos no pueden interpretar las normas de Derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho internacional de los *Derechos Humanos*, estatuto normativo reconocido por Chile, que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

En consecuencia, no resultan aplicables las normas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como pretende el Fisco demandado, pues ellas contradicen, como se dijo, la normativa internacional.

Así las cosas, se rechazará la excepción de prescripción extintiva, alegada de forma subsidiaria por la demandada, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

CUARTO: Que, como se dirá en lo resolutivo, también se rechazará la excepción de pago, alegada como excepción principal, fundada en que el actor ya fue indemnizado con ocasión del otorgamiento de pensiones de reparación de la Ley N° 19.123 y sus sucesivas modificaciones, y en virtud de la Ley N° 19.980, pues ello contradice la normativa internacional antes señalada y porque el Derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional.



La normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado. Así, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante de quienes reclaman un daño como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento y la relación con la víctima para plantear su pretensión.

QUINTO: Que el *daño moral* es la lesión o agravio, efectuado culpable o dolosamente, a un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro. Esta particularidad hace que no puedan aplicarse al momento de precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de los daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo. El menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y por su fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial, sobre la base de presunciones, especialmente, habida consideración de aspectos tales como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado.

SEXTO: Que, para acreditar los fundamentos de su acción, los demandantes rindieron prueba documental, legalmente acompañada y no tachada, consistente en:

- 1.- Certificados de nacimiento de doña Juana Cárcamo Velásquez, Verónica Jimena Santana Cárcamo, Omar Rodrigo Santana Cárcamo Y Marcelo Alejandro Santana Cárcamo.
- 2.- Certificado de Matrimonio entre don Raúl Santana Alarcón y doña Juana Cárcamo Velásquez.



- 3.- Copia de sentencia definitiva dictada en autos criminales causa rol 1673-2003 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Valdivia con citación.
- 4.- Copia Informe Comisión Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo 1, página 402.
- 5.- Informe emanado de Programa PRAIS dependiente del Servicio de Salud de Osorno, bajo formato protocolo de Estambul, donde constan daños morales de doña Juana Cárcamo Velásquez.
- 6.- Informe emanado de Programa PRAIS dependiente del Servicio de Salud de Osorno, bajo formato protocolo de Estambul, donde constan daños morales de don Marcelo santana Cárcamo.
- 7.- Informe emanado del Programa PRAIS, dependiente del Servicio de Salud de Osorno, bajo el formato protocolo de Estambul, donde constan daños morales de don Omar Santana Cárcamo.
- 8.- Informe emanado del Programa PRAIS, dependiente del Servicio de Salud de Osorno, bajo el formato protocolo de Estambul, donde constan daños morales de doña Verónica Santana Cárcamo.

Al folio 38, rindió prueba testimonial, con los dichos de los testigos Angelica Gallegos Toledo y Pedro Adalberto Pacheco Quelin, quienes legalmente examinada y no tachada declara.

Gallegos: Al punto uno de la interlocutoria de prueba declara que es efectivo que sufrieron daño por la desaparición de su padre don Raúl Santana el año 1973, cuando se fueron a entregar a la casa del Teniente Adrián Fernández Fernández que estaba a cargo de la Tercera Comisaria de Osorno, que quedaba en Rahue bajo, pensando en que había una amistad con él. El teniente procedió a detenerlos en la Tercera comisaria. Él está desaparecido y desde luego debe haber sufrido las torturas a que eran sometidos los presos, la parrilla el submarino etc. Esto significó para la familia doña Juana Cárcamo y sus hijos que doña Juana tuvo que salir a trabajar de empleada doméstica y tuvo que dejar a sus hijos, quienes también tuvieron que salir a buscar trabajos como suplementeros, ya que eran menores de edad de 8, 6 y 3 años. Quedando por esto toda la familia con secuelas. Esto lo sé por ser esposa de un detenido desaparecido Rodolfo Iván Leveque Carrasco, de mi cuñado Vladimir Leveque Carrasco, además participo en la agrupación de Detenidos desaparecidos y ejecutados políticos



desde el año 1974.

Al punto dos de la interlocutoria de prueba señala Si tienen relación los entre los hechos, y el daño provocado, ya que ello fue en desmedro de su situación económica, como la falta de sustento básico, comida y otros. Existió daños Psicológico en los demandantes, como depresión, traumática que está de por vida, y esto lo sé por qué hasta hoy está en tratamiento y debe tomar medicamentos en la mañana y en la noche.

Al punto tres de la interlocutoria de prueba declara que la calidad de la vida de un ser humano no tiene valor y a alguno de los familiares de políticos importantes le pagaron mil millones de pesos y estimo que es justa la cantidad que ellos demandan.

Al punto cuatro de la interlocutoria de prueba señala que no fueron indemnizados en forma alguna, porque la pensión que reciben es lo que el Estado les paga como un sueldo del marido. Pero no han sido indemnizados.

Pacheco: Al punto uno de la interlocutoria de prueba declara que si es efectivo y le cuento lo que yo viví por ser vecino de la familia Santana en la Población Balmaceda de Osorno, yo vivía a cuatro casas de ellos, y fui testigo de lo que fue la Sra. Juana Madre de Omar, para sacar a sus hijos adelante, ya que tuvo que trabajar de empleada doméstica y cuando más me vincule fue cuando empezaron a tener pensionista. Uno de los problemas que ellos tenían era que no se vinculaban con el vecindario debido al temor del resto de ser tachados como comunistas. Todos sabíamos la forma en que había muerto el Padre de Omar, todas las familias teníamos miedo a sufrir las mismas consecuencias. Otro daño fue que los cuatro no pudieron continuar con sus estudios. Yo veo un tema económico y un problema de vinculación con sus padres la casa era una casa muy triste y la madre pasaba tiempo encerrada, tuvo sufrimiento Psicológico por lo que vivió, esto dura hasta el día de hoy, y aun cuando ha pasado más de cuarenta años ellos siguen siendo señalados como los comunistas de barrio. Yo a la fecha de la desaparición del padre de Omar tenía 8 años pero todos supimos que fue lo que le pasó y que lo encontraron muerto después de un año amarrado con alambre y lo que cuentan es que estaba en un saco con cal, esto era de conocimiento de toda la población. Era tanto el miedo que



tenía esta familia que llegaron a cambiar la ubicación de la puerta de su casa para ver quien los buscaba ya que fueron vigilados por un largo tiempo.

Al punto dos de la interlocutoria de prueba señala que de hecho, todos los problemas que ellos tuvieron después de la muerte de su padre son ocasionados por el trauma que les dejó, y por las persecuciones que sufrieron en el tiempo. El hecho que no hayan podido estudiar por falta de recursos y no existían las condiciones para ello, y la madre temía mucho de mandarlos a estudiar y quería tenerlos protegidos, en la casa porque era mucho su temor de que les pasara algo. En esa casa había mucho temor y de lo único que se hablaba era de la C.N.I. y de las torturas.

Al punto tres de la interlocutoria de prueba declara que a ellos les trucidaron su vida, le mataron a su padre y esposo, le cambiaron su futuro, ya que cuando estaba el padre y la madre podían haber sacado a sus hijos adelante, en esa casa repito, había mucho dolor. Y esa pena no la va eliminar la plata pero les va a servir para aplacar un poco su padecimiento y dolor. No se puede referir al monto, porque no es el apropiado para esto.

SÉPTIMO: Por su parte, la demandada rindió prueba *documental*, no objetada, consistente en el oficio N°999-2020 del 07-10-2020, suscrito por el Jefe del Departamento de Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social (IPS) remitido al Consejo de Defensa del Estado, de 26 de noviembre de 2020, informando de los beneficios reparatorios del Estado otorgados a los demandantes.

- 1.- Juana Cárcamo Velásquez por la suma de \$ 108.641.987
- 2.- Verónica Santana Cárcamo por la suma de \$10.000.000
- 3.- Omar Santana Cárcamo por la suma de \$ 10.000.000 y
- 4.- Marcelo Santana Cárcamo por la suma de \$10.000.000.

OCTAVO: En cuanto al *daño moral* solicitado, la testimonial rendida da cuenta, en síntesis, de la existencia y entidad del daño psicológico, familiar y social relacionado con la detención, muerte por fusilamiento de su esposo y padre Raúl Santana Alarcón.

NOVENO: Que, la prueba documental rendida, en especial, el informe practicado por la trabajadora social (PRAIS) Paula Cárcamo Pérez,



la Psicóloga (PRAIS) Daniela Barrientos Gómez y el médico de familia (PRAIS) Carlos Morales Negrón, quienes arriban a las siguientes conclusiones respecto de:

Juana Cárcamo: “[...] En el ámbito psicológico, la Sra. Juana se Encuentra en un duelo suspendido en el tiempo, que la lleva a mantener una mezcla de pena, rabia, dolor, trauma y afectación de los vínculos afectivos, teñida por la idealización del cónyuge en su rol de padre y proveedor. Para la Sra. Juana, el duelo se volvió patológico, la injusticia e impunidad de los agentes del estado acrecentó ansiedades y angustias, permaneciendo en sentimientos de frustración y rencor, sin ser posible establecer un punto de fin al dolor, haciéndose presentes al día de hoy síntomas de reviviscencia, principalmente al recordar las circunstancias familiares que suceden a los hechos represivos, así como también síntomas de hipervigilancia y reactividad, ansiedad e irritabilidad. El proceso de entrevista inevitablemente genera la retraumatización.”

Marcelo Santana: “[...] Desde el ámbito psicológico señalar que Marcelo muestra consecuencias emocionales ligadas al impacto que generan en él y su familia, la muerte traumática de su padre a manos de agentes del estado, principalmente por el deterioro familiar causado por este hecho represivo. La falta de justicia e impunidad, hacen que permanezca un sentimiento de frustración y rencor por la injusticia a la cual como familia han sido sometidos. Finalmente, es necesario señalar que producto de los eventos descritos la paciente presenta historia y síntomas indicativos de TEPT, de curso crónico, lo que hasta la fecha no ha tenido reparación del daño causado.”

Omar Santana: “[...] Desde el ámbito psicológico señalar que Omar muestra consecuencias emocionales ligadas al impacto que generan en él como su familia la muerte traumática de su Padre a manos de agentes del estado, principalmente por el deterioro familiar causado por este hecho represivo. La falta de justicia e impunidad, hacen que permanezca un sentimiento de frustración y rencor por la injusticia a la cual como familia han sido sometidos. Finalmente, es necesario señalar que producto de los eventos descritos la paciente presenta historia y síntomas indicativos de TEPT, de curso crónico, lo que hasta la fecha no ha tenido reparación del



daño causado.”

Verónica Santana: “[...]En el ámbito psicológico, la Sra. Verónica Santana se encuentra en un duelo suspendido en el tiempo, que la lleva a mantener una mezcla de pena, rabia, dolor, trauma y afectación de los vínculos afectivos. Paralizada esperando encontrar consuelo frente a la pérdida y asesinato de su padre, lo que da cuenta de su inhibición psíquica. Para la Sra. Verónica Santana el duelo se volvió patológico, la injusticia e impunidad de agentes del estado, acrecentó ansiedades y angustias, permaneciendo en ella gran parte de su vida la desesperanza junto a sentimientos de frustración y rencor, sin ser posible establecer un punto de fin al dolor, haciéndose presentes al día de hoy síntomas de reviviscencia, principalmente al recordar las circunstancias familiares que suceden a los hechos represivos, así como también síntomas de hipervigilancia y reactividad, ansiedad e irritabilidad. El proceso de entrevista inevitablemente genera la retraumatización.

Todo lo anterior, como consecuencia de la detención y ejecución (por fusilamiento) de su esposo y padre Raúl Santana en el año 1973. Por tanto, la vivencia de sufrimiento por la muerte por fusilamiento de su padre y esposo es asimilable al concepto de daño moral.

DÉCIMO: Así, por otra parte, con el análisis de los medios de prueba valorados en los fundamentos anteriores permiten dar por acreditada la existencia y entidad del daño moral.

En consecuencia, se le otorgará prudencialmente la suma total de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos), según se detalla:

- 1.- Juana Cárcamo Velásquez por la suma de \$ 30.000.000.
- 2.- Verónica Santana Cárcamo por la suma de \$10.000.000.
- 3.- Omar Santana Cárcamo por la suma de \$ 10.000.000; y
- 4.- Marcelo Santana Cárcamo por la suma de \$10.000.000.

UNDÉCIMO: Que la demás prueba rendida en nada altera las conclusiones a que se ha arribado con precedencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en los artículos 5º, 6º y 38 de la Constitución Política de la República; los artículos 1.1. y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1698 del Código Civil, 144, 254 y siguientes del Código de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKDXBHWXDJ

Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que **SE RECHAZAN** las excepciones perentorias de pago y de prescripción extintiva de la acción opuesta por la demandada.

II.- Que **SE ACOGE PARCIALMENTE** la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta al folio 1 por don Jorge Andrés Ríos del Río en representación de doña Juana Cárcamo Velásquez, Verónica Jimena Santana Cárcamo, Omar Rodrigo Santana Cárcamo y Marcelo Alejandro Santana Cárcamo; y, en consecuencia, se condena al **Fisco de Chile** a pagar la suma total de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos) a los demandantes, de conformidad a lo detallado en el considerando décimo de esta sentencia.

III.- Las cantidades ordenadas pagar a cada uno de ellos se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y devengará intereses desde que el deudor se constituya en mora en el pago de la suma fijada en la sentencia.

IV.- No se condena en costas a la demandada por gozar del privilegio de pobreza.

Regístrese, notifíquese por cédula y consúltese si no se apelare.

C-650-2022.

Redacción de don EDINSON LARA AGUAYO, Juez Titular; autoriza don David Silva Estrada, Secretario Titular. -

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, se incluyó en el estado diario la sentencia precedente. Valdivia, a catorce de septiembre del año dos mil veintidós.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKXDxBHWDJ